

**D. PEDRO ABIZANDA CHORDI, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA.**

**C E R T I F I C O :** Que el Pleno de la Sala de Gobierno del mismo, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

**TERCERO.-NORMAS DE REPARTO DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE ESTE TERRITORIO.**

"Con motivo de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley Orgánica 8/2002 y la Ley 38/2002, ambas de 24 de octubre, y siguiendo lo dispuesto por el Reglamento 5/195, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, modificado por Acuerdo Reglamentario 2/2003, y por la Instrucción 3/2003, sobre normas de reparto penales y registro informático de violencia doméstica, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aprobado las pertinentes modificaciones en las normas de reparto de todos los partidos judiciales de Cataluña, tras interesar de todas las Juntas de Jueces las propuestas al efecto. Ello ha permitido constatar, en la visión global, la variedad de normas de reparto existentes y la necesidad de poner orden y coherencia en todas ellas.

En materia de violencia doméstica, la citada instrucción ha permitido introducir idénticas normas en todos los partidos y en el resto de supuestos de juicios rápidos y juicios de faltas la reforma ha conllevado lograr una clara homogeneidad, pese a formulaciones textuales distintas en cada partido. Ello ha venido a sumarse al esfuerzo de criterios homogéneos que viene practicando la Sala en la aprobación de las normas. pero, con todo, todavía la disparidad es grande y no responde a ningún hecho objetivo. Todos los partidos judiciales con guardias semanales, más el octavo día de juicio de faltas, plantean unos problemas básicamente iguales en lo que atañe a las normas. Incluso la separación de jurisdicciones no afecta a esa problemática básica (salvo en escasísimos supuestos que pueden preverse también con carácter general) como lo demuestra el hecho de que la separación no haya provocado el cambio de las normas anteriores, salvo la previsión de un régimen transitorio.

Partiendo de esas premisas, la formulación de unas normas de reparto comunes básicas, sin perjuicio de las singularidades que puedan ser aprobadas caso por caso y justificadamente, aparece como un elemento de seguridad jurídica que debe alcanzarse. De ahí la presente iniciativa de la Sala de Gobierno.

El proceso se inició con un borrador aprobado inicialmente por la Comisión de la Sala y remitido a todos los decanatos para ser objeto de enmiendas y comentarios. Catorce partidos judiciales han hecho uso de esa posibilidad. Con todas esas sugerencias se ha redactado un nuevo texto, incorporando todo aquello que ha parecido oportuno y razonable. En ese proceso se ha tenido muy en cuenta que, en la medida de lo posible, las normas han de responder a unos criterios básicos que eviten la elección de juzgado, que hagan operativa la guardia y que eviten los problemas de atribución de asuntos mediante la claridad y la objetividad. Debe destacarse que la introducción del criterio de competencia por mera recepción de atestado o denuncia, introducida para los supuestos de juicios rápidos e inmediatos por imperativo de la propia norma reglamentaria, que a su vez responde a la configuración de esos supuestos en la ley procesal, podría inducir a su generalización, con mecanismos de corrección en los casos con más peligro para la elección de juzgado. Sin embargo, es criterio de la Sala que la competencia por momento de ocurrencia de los hechos, cuando sea posible, es el que más garantiza la objetividad y el principio de juez predeterminado. Esos valores deben prevalecer sobre cualesquiera otras consideraciones.

El artículo 25 del Reglamento 5/1995 prevé la competencia de la Sala de Gobierno para la definitiva aprobación de las normas de reparto. En su punto 2 faculta a la Sala para recabar de las Juntas de Jueces las nuevas normas o modificaciones cuando ello fuere necesario para la mejor administración de justicia. Nos hallamos en tal caso. La propia idea de llevar a un texto uniforme básico requería que fuera la propia Sala la que propusiera un primer borrador. Incorporadas las mejoras propuestas por las Juntas de Jueces, procede ahora dar el plazo previsto en el referido artículo para que las juntas hagan sus propuestas definitivas con vistas a que la Sala pueda aprobar también definitivamente las normas de reparto aplicables a los Juzgados de Instrucción con guardias semanales.

Por ello, el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sesión de dieciséis de diciembre de dos mil tres, acuerda:

- 1) Aprobar como proyecto el adjunto texto de Normas de Reparto de los Juzgados de Instrucción de Cataluña con guardias semanales.
- 2) Recabar de las Juntas de Jueces, a través del Juez Decano, las propuestas de modificación que estimen oportunas, con el apercibimiento de que si transcurrido un mes desde la recepción de la notificación del presente acuerdo no hay pronunciamiento se entenderá la total conformidad con el texto propuesto.
- 3) En el supuesto de recibir propuestas, la Sala de Gobierno decidirá el texto definitivo tras considerarlas debidamente."

#### NORMAS DE REPARTO DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE CATALUÑA<sup>1</sup>

##### 1. Regla general

- 1.1. Será competente para el conocimiento de cualquier hecho el juzgado que estuviera de guardia en el momento en que se produce tal hecho, salvo las excepciones de los puntos siguientes. Para la aplicación de esta norma se tendrán en cuenta los criterios específicos para delitos permanentes y continuados.
- 1.2. En el supuesto de no constar en el atestado, ~~en la querella~~ o en la denuncia el momento de los hechos, el asunto será repartido aleatoriamente entre los juzgados.
- 1.3. Las querellas<sup>2</sup> serán siempre repartidas por su turno especial, salvo que les sea aplicable el criterio de antecedentes.
- 1.4. Si del propio atestado o denuncia no resultan datos suficientes para la calificación como delito o falta, se considerará delito a efectos de estas normas de reparto.
- 1.5. Los atestados, querellas y denuncias ampliatorios de unos hechos de los que ya conoce un juzgado son competencia de éste.

##### 2. Delitos previstos en el artículo 795 LECrim.

- 2.1. En los supuestos de atestados policiales con persona detenida o citada remitidos según el artículo 795 de la Ley de

---

<sup>1</sup>

Enjuiciamiento Criminal, será competente el juzgado de guardia que reciba el atestado. Esa competencia se mantendrá aunque las diligencias sean posteriormente tramitadas como diligencias previas o como faltas y no como diligencias urgentes. Se exceptúa lo previsto para la violencia doméstica.

2.2. Quedan excluidos de la competencia del juzgado de guardia y, por tanto, de la aplicación del 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los atestados sobre hechos de los que ya conoce otro juzgado, salvo que requerido éste por el juzgado de guardia se inhíba y sea posible la tramitación del juicio rápido.

3. Faltas con denunciado identificado y con citación policial (artículo 962 LECrim.): El juzgado de guardia será competente para el conocimiento de los atestados tramitados según el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4. Faltas con denunciado identificado y sin citación policial (artículo 964 LECrim.)

4.1. El juzgado de guardia será competente para el conocimiento de los atestados o denuncias en los supuestos del artículo 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4.2. Se exceptúan de la anterior norma las faltas de los artículos 621 y 636 del Código Penal, que se regirán por la norma general 1.

5. Normas especiales:

5.1. Diligencias policiales ampliatorias sobre varios hechos: en caso de ser varios los hechos a los que se refieren las diligencias ampliatorias, y conozca ya de alguno o algunos uno o más juzgados, las diligencias ampliatorias serán remitidas al juzgado con los antecedentes más antiguos (según fecha y número de registro en la guardia o, en su defecto, en el juzgado). Será competencia del juzgado receptor aplicar los criterios de conexidad o no, es decir reclamar los demás asuntos o librar los pertinentes testimonios. A éstos, les será de aplicación la norma general 1. Las cuestiones basadas en el criterio de conexidad serán ajenas a las normas de reparto y resueltas por el tribunal superior común.

5.2. Querellas o denuncias con varios antecedentes: les será de aplicación los mismos criterios anteriores (5.1.).

- 5.3. Delitos y faltas continuados: en los supuestos de distintos hechos que puedan ser encuadrados en el concepto de delito o falta continuados, y en defecto de antecedentes, será aplicada la norma general 1. teniendo en cuenta el momento del último hecho.
- 5.4. Delitos y faltas permanentes: en los supuestos de hechos generadores de situaciones antijurídicas calificables como delitos permanentes, la norma general 1. será aplicada teniendo en cuenta el momento de inicio de la situación.
- 5.5. Exhortos y demás despachos de cooperación jurisdiccional penal: serán competencia del juzgado de guardia los que deban practicarse inmediatamente fuera del horario de oficina. El resto serán repartidos por antecedentes o, en su ausencia, aleatoriamente<sup>3</sup> ~~o de acuerdo con la norma general 1., según el caso.~~<sup>4</sup>.
- 5.6. Entradas y registros: serán competencia del juzgado de guardia cuando deban practicarse inmediatamente fuera del horario de oficina. El resto serán repartidos por antecedentes o de acuerdo con la norma general 1., según el caso, sin perjuicio de que la práctica de la medida sea llevada a cabo por el juzgado de guardia. En los supuestos de entradas y registros acordados por el juzgado de guardia, sin antecedentes, una vez practicada la medida el asunto será turnado según la norma general 1. entre todos los juzgados del partido.
- 5.7. Intervenciones telefónicas: serán de aplicación los mismos criterios que para las entradas y registros. Las prórrogas serán en todo caso competencia del juzgado que conoce de la causa.
- 5.8. Detenidos: el juzgado de guardia será competente para decidir sobre su situación, lo cual no implica asunción de competencia para el asunto. Si ya conoce del hecho otro juzgado y la puesta a disposición judicial se produce durante el horario de oficina, ~~es competente el juzgado con los antecedentes~~ ese juzgado asumirá las diligencias para resolver sobre la situación personal del detenido excepto si tiene señalamientos coincidentes y no puede reorganizar su agenda.<sup>5</sup>
- 5.9. Levantamiento de cadáveres y otras medidas urgentes: será competente el juzgado de guardia, sin que implique asunción de competencia. Tras la práctica de las diligencias, será de aplicación la norma general 1.
-

- 5.10. Habeas corpus: será competente el juzgado de guardia ante el que se presente la solicitud.
- 5.11. Internamiento de extranjeros: será competente el juzgado de guardia ante el que se presente la solicitud, aunque el extranjero se encuentre incurso en una causa penal.
- 5.12.<sup>6</sup> Recursos: debe estarse a lo dispuesto por los artículos 219 y 220 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- 5.13. Quebrantamiento de condena o medidas penales: salvo lo dispuesto para la violencia doméstica (§ 6),<sup>7</sup> será competente por antecedentes el juzgado que dictó la sentencia o resolución incumplida o el juzgado que instruyó la causa cuya sentencia se ha quebrantado.<sup>8</sup>
- 5.14. Incumplimiento de medidas civiles: en los partidos con juzgados de jurisdicción mixta, será competente como juzgado de instrucción el juzgado que acordó las medidas como juzgado civil.
- 5.15. Apelaciones de juicios de faltas: serán repartidos aleatoriamente entre todos los juzgados.
- 5.16. Extracción y donación de órganos, transfusión de sangre y donación del cuerpo para la ciencia: serán en todo caso competencia del juzgado de guardia.
- 5.17. Sustitución del Juzgado de Menores y diligencias urgentes civiles y contencioso-administrativas: se estará a lo dispuesto en el artículo 40, puntos 3 y 4, del Reglamento 5/1995, de los Aspectos Accesorios de la Actuaciones Judiciales.
- 5.18. Asuntos recibidos por inhibición de otros partidos: les será de aplicación la norma general 1. A tales efectos se considerará como juzgado con antecedentes el que, en su caso, se inhibió a favor de otro partido tras incoar el procedimiento correspondiente. Por ello, no causará antecedentes a esos efectos la inhibición hecha en su día por el juzgado de guardia sin practicar diligencias o habiendo practicado únicamente las urgentes e indispensables propias de la guardia.
- 5.19. Testimonios: al margen de lo que establece la norma 5.1, cuando un juzgado libre un testimonio de particulares de un asunto penal del que ya viene conociendo, será competente para el propio testimonio, salvo que haya causa de abstención, en cuyo caso será repartido aleatoriamente excluyendo al juzgado en cuestión. A los testimonios de particulares de asuntos civiles les será aplicable
-

la regla general 1, excluyendo también al juzgado en cuestión si hay causa de abstención.

6. Normas específicas sobre asuntos de violencia doméstica.

6.1. Procesos por delito contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal (punto tercero.1 de la Instrucción 3/2003, adaptado a la reforma del C.P. según L.O. 11/2003):

6.1.1. El Juzgado de Guardia será el competente para la tramitación de los procedimientos del Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si dicta sentencia de conformidad, la comunicará al juzgado al que se refiere el párrafo siguiente.<sup>9</sup>

6.1.2. En aquellos casos en los que no sea posible la aplicación del anterior criterio -es decir, cuando un concreto asunto no pueda ser tramitado como juicio rápido-, el Juzgado de Instrucción que, por hechos punibles dirigidos contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, haya incoado con anterioridad, sin límite temporal alguno, un Sumario Ordinario por delito, un juicio de faltas, o bien Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado al amparo del artículo 774 Ley de Enjuiciamiento Criminal ó del artículo 798.2,1º de la misma Ley, conocerá también de los procesos penales que se incoen posteriormente -que no hayan podido ser tramitados como juicios rápidos- por hechos imputables al mismo autor contra los integrantes del mismo núcleo familiar, y ello aunque en aquel primer proceso se haya dictado auto de archivo, de sobreseimiento o de apertura de juicio oral, o hubiere recaído sentencia condenatoria o absolutoria.

6.1.3. A los anteriores efectos, el Juzgado de Instrucción que reciba el asunto y acumule o dicte auto de incoación lo pondrá de forma urgente en conocimiento de la Oficina de Reparto, quien procederá a tomar la correspondiente nota, salvo que los asuntos contra el mismo autor hubiesen sido atribuidos previamente a otro Juzgado de Instrucción por aplicación de la norma contenida en el anterior párrafo. En este último supuesto, la Oficina de Reparto lo comunicará inmediatamente a aquel Juzgado para que lo remita a éste de forma urgente, y practicará las correspondientes anotaciones en sus libros.

---

6.2. Juicios de faltas (punto quinto de la Instrucción 3/2003, adaptado a la reforma del C.P. según L.O. 11/2003):

6.2.1. El conocimiento de las faltas de los artículos 620.2 del Código Penal, siempre que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del mismo Código, corresponde al Juzgado de Guardia con independencia de la fecha de los hechos.

6.2.2. Cuando el Juzgado de Guardia incoe juicio de faltas al amparo de lo dispuesto por el artículo 963.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o por el artículo 964 de la misma Ley, procederá a celebrar el correspondiente juicio en el servicio de guardia de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 5/95, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

6.2.3. Cuando, una vez intentada la celebración de juicio durante el servicio de guardia, no sea posible su celebración, el enjuiciamiento corresponderá al mismo Juzgado que recibió el atestado en funciones de guardia, quien deberá celebrar el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 965.1,2ª Ley de Enjuiciamiento Criminal. Remitirá copia de la sentencia al juzgado al que se refiere el párrafo segundo del punto 6.1.2. (juzgado con antecedentes).<sup>10</sup>

6.3. Órdenes de protección:

6.3.1. El juzgado de guardia será competente para resolver cualquier petición de orden de protección que se presente durante su guardia, aunque posteriormente se inhíba según el punto 6.1 o se aduzca en ella hechos de los que ya conoce otro juzgado.

6.3.2. A tales efectos será de aplicación la prórroga de la guardia prevista en el artículo 799 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

7. ~~Cuestiones de competencia relativa~~ sobre atribución de asuntos:

Las ~~cuestiones de competencia relativa~~ sobre atribución de asuntos, es decir, las cuestiones cuya resolución compete al decanato, se limitan a la discrepancia sobre la aplicación de las normas de reparto, que solo regulan la atribución ~~de competencia~~ en el momento inicial del asunto, entendiendo por tal el de recepción de unas actuaciones para incoación de procedimiento o para

---



acumulación a un asunto ya incoado, según criterio jurisdiccional del juzgado que asuma ~~la competencia~~ el asunto. Cualquier inhibición o requerimiento de inhibición surgidos en el curso de la instrucción y basados, por tanto, en criterios de conexidad, queda fuera de las cuestiones ~~de competencia relativa~~ aquí reguladas.

#### 7.1. Cuestiones negativas:

7.1.1. El juzgado que reciba un atestado, una denuncia, una querella, un asunto inhibido de otro partido judicial o un exhorto o despacho, si considera que no le corresponde ~~la competencia~~ el asunto según las normas de reparto, antes de incoar o acumular a un asunto preexistente deberá remitirlo, con resolución sucintamente motivada, al juzgado al que considere ~~competente~~ que le corresponde o al decanato para su reparto aleatorio antes del transcurso del plazo de cinco días<sup>11</sup>. El segundo juzgado, en igual plazo, deberá ~~devolverlas~~ devolverlo al primero si ~~se considera incompetente si no lo acepta~~, también con resolución motivada y testimonio de lo necesario, si es el caso, para el análisis de esa motivación. El primer juzgado, en el plazo de cinco días, planteará la cuestión ~~de competencia~~ ante el decanato si discrepa del criterio del segundo.

7.1.2. El transcurso del plazo de cinco días, del que quedan excluidos sábados y festivos, comporta la asunción tácita ~~de la competencia relativa~~ del asunto.

7.1.3. El juez decanato, por resolución motivada resolverá las cuestiones que se planteen en el plazo de cinco días, excluidos sábados y festivos. Sin perjuicio de su ejecutividad, contra el acuerdo puede interponerse recurso de alzada ante el Pleno del C.G.P.J. y, en su caso, de revisión, en los plazos y formas previstos en la Ley 30/92.

7.1.4. Cuando exista persona privada de libertad, los plazos anteriores no deben ser agotados, de manera que el planteamiento de la cuestión y su resolución deben realizarse en el plazo más breve posible, sin perjuicio de la aplicabilidad del plazo de asunción tácita.

#### 7.2. Cuestiones positivas:

El juzgado que considere que unas actuaciones que han sido asumidas por otro juzgado le corresponden, le requerirá de inhibición. El juzgado requerido deberá responder en el plazo de cinco días,

---

excluidos sábados y festivos. Ante el transcurso de ese plazo sin contestación o ante la respuesta negativa, el primer juzgado, también en el plazo de cinco días, excluidos sábados y festivos, podrá planear la cuestión ante el decanato, que resolverá en el mismo plazo. Sin perjuicio de su ejecutividad, contra el acuerdo puede interponerse recurso de alzada ante el Pleno del C.G.P.J. y, en su caso, de revisión, en los plazos y formas previstos en la Ley 30/92.

## 8. Clases de reparto aleatorio y rectificaciones

8.1. Para la práctica del reparto aleatorio entre todos los juzgados se establecen las siguientes clases, salvo norma especial ratificada por la Sala de Gobierno:

- 1ª Asuntos con detenido
- 2ª Asuntos sin detenido
- 3ª Querellas
- 4ª Exhortos y demás despachos
- 5ª Apelaciones de faltas

8.2. Los errores en el reparto pueden ser rectificadas en todo momento por el decanato.

<sup>1</sup> Los textos subrayados son adiciones a la primera versión, enviada a los juzgados. Los ~~textos tachados~~ corresponden a esa primera versión.

<sup>2</sup> Se recoge la sugerencia de Tarragona.

<sup>3</sup> Recoge la sugerencia de Lleida.

<sup>4</sup> Tarragona: salvo el tema de quema de droga en Constantí -norma especial para Tarragona- lo que proponen es lo que recoge este punto.

<sup>5</sup> Blanes propone que sea competente el juzgado de guardia, salvo que, una vez le es comunicada la detención al de la causa, reclame la presencia del detenido y decidir sobre su situación personal. El texto se inspira en esa idea.

<sup>6</sup> En la primera versión se repetía por error el número 5.11.

<sup>7</sup> La Instrucción 3/2003 (y por tanto su transcripción en estas normas) parece incluir el quebrantamiento en el artículo tercero.1, párrafo segundo.

<sup>8</sup> Para recoger la objeción de Tarragona.

<sup>9</sup> Recoge la sugerencia de Lleida.

<sup>10</sup> Recoge la sugerencia de Lleida.

<sup>11</sup> Lleida considera el plazo demasiado corto.

Sometido a la consideración de la Sala de Gobierno se aprueba por mayoría con el voto en contra de D. Pablo Colomina Cerezo, que anuncia voto particular

**VOTO PARTICULAR DEL SR. D. PABLO COLOMINA CEREZO VOCAL CON CATEGORIA DE JUEZ, DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA**

En primer lugar debo reconocer la loable finalidad pretendida por el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al pretender unificar las normas de reparto aplicables en el territorio en el que ejerce sus competencias, así como el notable esfuerzo desarrollado para la consecución de dicha finalidad, en beneficio de una mejor administración de la justicia.

Dicho lo anterior, debo manifestar mi disconformidad con el criterio expuesto por el resto de vocales de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, si bien entendiendo las razones que llevan a los mismos a pretender la aprobación de las "Normas de Reparto de los Juzgados de Instrucción de Cataluña", y dar con dicho objeto, el traslado previsto en el artículo 25.2 del Reglamento numero 5/1995, de 7 de junio de los Aspectos Accesorios de la Actuaciones Judiciales, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en ejercicio de la potestad reglamentaria conferida por el artículo 110 apartado 2 letra ñ).

Debo indicar que el núcleo de la discrepancia estriba en la **legalidad, aplicación e interpretación** del artículo 25.2 del Reglamento numero 5/1995, de 7 de junio de los Aspectos Accesorios de la Actuaciones Judiciales que establece que "Las Salas de Gobierno podrán recabar de las correspondientes Juntas de Jueces la elaboración de nuevas normas de reparto o la modificación de las vigentes cuando ello fuere necesario para la mejor administración de justicia. Si en el plazo de un mes a partir de dicho requerimiento, la Junta de Jueces omitiera la propuesta solicitada, la Sala de Gobierno aprobará las normas que estime pertinentes"

En este sentido debe indicarse, **respecto de la legalidad** del mencionado precepto reglamentario, y a los fines que interesan en este voto particular, que el ejercicio de la potestad reglamentaria,

para ser legítimo, debe realizarse dentro de unos límites, que han sido puestos de manifiesto por numerosas sentencias del Tribunal Supremo. De tal modo, que entre otros, son límites formales de la potestad reglamentaria, la observancia de la jerarquía normativa, respecto a la Constitución y a la Ley (arts. 9.3, 97 y 103 CE), entendiendo que son exigencias y límites materiales, que afectan al contenido de la norma reglamentaria, entre otros el respeto a la ley y a los principios generales del Derecho, ya que, la Administración está sometida a la Ley y al Derecho, (artículo 103 de la Constitución Española), y el Derecho "no se reduce al expresado en la Ley sino que comprende dichos Principios en su doble función legitimadora y de integración del ordenamiento jurídico, como principios técnicos y objetivos que expresan las ideas básicas de la comunidad y que inspiran dicho ordenamiento", (STS, . 3ª sec. 4ª , S 07-10-2002), y en este sentido se vulnerara el principio de jerarquía normativa cuando exista una contradicción entre la norma que pretende ser desarrollada, y el Reglamento que la desarrolla. Dicho límite se encuentra expresamente previsto en la norma habilitante de la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial, cuando establece el artículo 110.2 de la L.O.P.J., que "El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia y con subordinación a las leyes, podrá dictar reglamentos de desarrollo de esta ley para establecer regulaciones de carácter secundario y auxiliar".

Descendiendo de las consideraciones jurídicas generales al caso concreto, es de resaltar por una parte, que el artículo 167 de la L.O.P.J., establece en su apartado primero que "Donde hubiere dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirán entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional, (...)". Al propio tiempo se establece en el artículo 152.2 apartado 1º párrafo primero que "A las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, en Pleno o en Comisión, compete además: Aprobar las normas de reparto de asuntos entre (...) los Juzgados del mismo orden jurisdiccional, con sede en la Comunidad Autónoma correspondiente.", por tanto tales preceptos de la L.O.P.J, atribuyen de modo inequívoco la propuesta de norma de reparto a las Juntas de Jueces de los diversos partidos judiciales, y la

aprobación de las mismas a las correspondientes Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Del mismo modo únicamente se prevé, una excepción, respecto de dicho sistema de distribución de asuntos entre los diversos juzgados de un mismo orden jurisdiccional y radicado en un mismo partido judicial, en el artículo 152.2 apartado 1º párrafo segundo, de la citada L.O.P.J, cuando establece, -el subrayado no aparece en la disposición citada- que "Excepcionalmente, de forma motivada, y cuando las necesidades del servicio así lo exigieren, la Sala de Gobierno podrá ordenar que se libere del reparto de asuntos, total o parcialmente, por tiempo limitado, a una Sección o a un Juez determinado."

Por otra parte debe indicarse que la regulación que se efectúa en el artículo 25.2 del Reglamento numero 5/1995, de 7 de junio de los Aspectos Accesorios de la Actuaciones Judiciales, - anteriormente reproducido-, o cuanto menos, -como posteriormente se indicará-, la interpretación y aplicación que del mismo se realiza por parte de la Sala de Gobierno, contraviene frontalmente los preceptos anteriormente citados de la L.O.P.J, en cuanto que dicha norma reglamentaria, no se limita a desarrollar las reglas de aprobación o modificación de las normas de reparto, sino que posibilita que se deje sin efecto, mediante la utilización de un concepto jurídico indetermindado, ("la mejor administración de justicia" ), el sistema de necesaria propuesta de las Juntas de Jueces, para la aprobación de dichas normas de reparto, al configurar a la Sala de Gobierno, como órgano iniciador del procedimiento de elaboración de las normas de reparto, y posibilitar, como sucede en la resolución adoptada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la elaboración por esta de las denominadas "Normas de reparto de los Juzgados de instrucción de Cataluña", lo cual es contrario al artículo 167 de la L.O.P.J, ya que dicha norma habilita para que las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia dejen sin efecto dicho precepto, en lo concerniente a la necesaria propuesta de las Juntas de Jueces, para aprobar las normas de reparto, dejando vacio de contenido dicho precepto.

En este sentido debe indicarse que la L.O.P.J, únicamente ha exceptuado la necesidad de la propuesta por parte de las Juntas de Jueces, en lo atinente a la distribución del reparto de los asuntos, en el artículo 152.2 apartado 1, cuando indica que la Sala de Gobierno podrá ordenar que se libere del reparto de

asuntos, total o parcialmente, por tiempo limitado, a una Sección o a un Juez determinado, y dicha excepción la regula la L.O.P.J., con muchas cautelas, al afirmar "Excepcionalmente, de forma motivada", sin que se haya previsto otra excepción al mecanismo propuesta de Junta de Jueces, aprobación de Sala de Gobierno.

Por ello el artículo 25.2 del Reglamento 5/1995 de 7 de junio, vulnera el principio de jerarquía normativa, (art. 9.3 de la Constitución Española), al contravenir y dejar vacío de contenido el artículo 167 y 170 de L.O.P.J., excediendo la función de desarrollo de dicho precepto, y infringiendo la propia norma habilitante de la potestad reglamentaria del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, ( artículo 110.2 y 127.8 de la L.O.P.J.), que indica , como no puede ser de otro modo, la subordinación del reglamento a la Ley, y por ello debe ser inaplicable, aplicándose directamente los preceptos de la L.O.P.J., en cumplimiento del principio de jerarquía normativa, que vincula a todos los poderes públicos ( art. 9.3 de la Constitución Española).

Respecto a la **aplicación e interpretación del mencionado precepto** debe indicarse, a los efectos meramente dialécticos, que aún partiendo de la hipótesis, ( no compartida), de la legalidad del artículo 25.2 del Reglamento 5/1995 de 7 de junio, el criterio de interpretación sistemática de las normas que establece el Código Civil en su art. 3.1' debe aplicarse a los Reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, de tal modo que la hermenéutica que se realice sobre los mismos no pueda hacerse aisladamente sino poniendo en relación todos sus preceptos entre si y con los preceptos de la L.O.P.J.. En tal sentido la interpretación y aplicación del apartado 2 del artículo 25 del mencionado Reglamento debe ser restrictiva, pues el mismo establece una excepción al modo de aprobación general de las normas de reparto, ( artículos 167.1 y 170.1 de la L.O.P.J., y 25.1 del Reglamento 5/1995 de 7 de junio), al prescindir de la necesaria propuesta de las Juntas de Jueces, debiendo aplicarse dicho precepto en supuestos excepcionales, interpretándose de modo restrictivo el concepto jurídico indeterminado que el mismo contiene, ("para la mejor administración de la justicia"), quedando fuera del ámbito de cobertura de dicho precepto todas aquellas interpretaciones y aplicaciones del mismo que no respeten la interdicción de la arbitrariedad, establecida para todos los poderes públicos en el artículo 9.3 CE y que supone la necesidad de

que el contenido de las normas y actos no sean incongruentes o contradictorias con la realidad que se pretenden regular o sobre la que pretenden ser aplicados, ni con la "naturaleza de las cosas" o la esencia de las instituciones. Y en este sentido se pretende la aplicación para la totalidad de los Juzgados de Instrucción de Cataluña, y para la totalidad de las normas de reparto de los mismos, del mecanismo excepcional para la aprobación de las normas de reparto, previsto en el artículo 25.2 del citado Reglamento, aplicación que por su carácter general excede del marco reglamentario y carece de cobertura en el mismo, pues es contraria a la naturaleza del procedimiento de aprobación de las normas de reparto ( artículos 167 y 170 de la L.O.P.J. y 25.1 del Reglamento 5/1995 de 7 de junio), que prevé la necesaria propuesta de las Juntas de Jueces, y deja vacía de contenido dicha potestad atribuida a las correspondientes Juntas de Jueces, y es por ello por lo que debo formular este voto particular.

**Y PARA QUE CONSTE** y en cumplimiento de lo acordado, libro y firmo el presente en Barcelona, a diecisiete de diciembre de dos mil tres.

**D. PEDRO ABIZANDA CHORDI, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA.**

**C E R T I F I C O :** Que el Pleno de la Sala de Gobierno del mismo, en sesión celebrada el 27 de abril de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

**PRIMERO.- NORMAS DE REPARTO DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE ESTE TERRITORIO**

Intervienen las Ponentes Sras. Alegret Burgués y Vivas Larruy, explicando detalladamente la propuesta que formulan, previo análisis y estudio de todas las comunicaciones recibidas.

Se formula la siguiente propuesta:

"El Pleno de la Sala de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2003 por mayoría, con el voto particular de D. Pablo Colomina Cerezo, aprobó por las razones que se exponen en la parte preliminar del acuerdo y al amparo del Art. 25 del Reglamento 5/1995 el proyecto de normas de reparto unitarias de los Juzgados de Instrucción con guardias semanales de los distintos partidos judiciales de Catalunya.

En el propio acuerdo se propuso recabar de las Juntas de Jueces del territorio las propuestas de modificación que se estimasen oportunas con el apercibimiento de que si transcurrido un mes desde la recepción de la notificación del acuerdo no había pronunciamiento se entendería la total conformidad con el texto propuesto. Se decía también que en el supuesto de recibir propuestas la Sala de Gobierno decidiría el texto definitivo tras considerarlas debidamente.

Han presentado objeciones al acuerdo de la Sala de Gobierno las Juntas de Jueces de Martorell, Lleida, Gava, Mataró, Manresa, Rubí, Blanes, Hospitalet, y Tarragona, en su mayor parte reiterando las alegaciones ya formuladas en su día cuando la Comisión de la Sala de Gobierno envió el anteproyecto a todas las Juntas de Jueces para que participasen su parecer.

Pueden clasificarse las objeciones presentadas en tres grupos.

Objeciones que se plantean sobre la propia competencia de la Sala de Gobierno para ordenar la adaptación de las normas de reparto de los Juzgados de Instrucción con guardias semanales a las



instrucciones dadas por la Sala de Gobierno contenidas en el proyecto remitido.

Objeciones que se refieren a la norma general de reparto en el sentido de estimar preferente, fundamentalmente por razones de tipo práctico, que la competencia de los distintos Juzgados de Instrucción venga atribuida como regla general por la recepción en la Guardia de los asuntos y atestados, en lugar de por la fecha de ocurrencia del hecho.

Objeciones en relación a puntos concretos y determinados del proyecto remitido por la Sala de Gobierno.

También plantean algunas Juntas de Jueces dudas interpretativas sobre las normas remitidas.

En relación con el primer punto de discrepancia la Sala de Gobierno, con todo respeto al criterio que mantiene el voto particular de un miembro de esta misma Sala al que se han adherido varias Juntas de Jueces, estima que tiene competencia para ordenar la adaptación de las distintas y contradictorias normas de reparto todavía vigentes de los diferentes Juzgados de Instrucción del territorio a un proyecto común, sin perjuicio de especificaciones justificadas y debidamente aprobadas que pudieran disponerse para partidos judiciales concretos.

Las razones por las que se inició el proceso unificador ya se expusieron en el acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2003. En dicho acuerdo se decía:

"Con motivo de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley Orgánica 8/2002 y la Ley 38/2002, ambas de 24 de octubre, y siguiendo lo dispuesto por el Reglamento 5/1995, de los Aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, modificado por Acuerdo Reglamentario 2/2003, y por la Instrucción 3/2003, sobre normas de reparto penales y registro informático de violencia doméstica, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aprobado las pertinentes modificaciones en las normas de reparto de todos los partidos judiciales de Cataluña, tras interesar de todas las Juntas de Jueces las propuestas al efecto. Ello ha permitido constatar, en la visión global, la

variedad de normas de reparto existentes y la necesidad de poner orden y coherencia en todas ellas.

En materia de violencia doméstica, la citada instrucción ha permitido introducir idénticas normas en todos los partidos y en el resto de supuestos de juicios rápidos y juicios de faltas la reforma ha conllevado lograr una clara homogeneidad, pese a formulaciones textuales distintas en cada partido. Ello ha venido a sumarse al esfuerzo de criterios homogéneos que viene practicando la Sala en la aprobación de las normas. Pero, con todo, todavía la disparidad es grande y no responde a ningún hecho objetivo. Todos los partidos judiciales con guardias semanales, más el octavo día de juicio de faltas, plantean unos problemas básicamente iguales en lo que atañe a las normas. Incluso la separación de jurisdicciones no afecta a esa problemática básica (salvo en escasísimos supuestos que pueden preverse también con carácter general) como lo demuestra el hecho de que la separación no haya provocado el cambio de las normas anteriores, salvo la previsión de un régimen transitorio.

Partiendo de esas premisas, la formulación de unas normas de reparto comunes básicas, sin perjuicio de las singularidades que puedan ser aprobadas caso por caso y justificadamente, aparece como un elemento de seguridad jurídica que debe alcanzarse”.

Se entendió así, y se sigue entendiendo que la unificación en materia de normas de reparto penal, en la medida de lo posible, es la tendencia general que debe prevalecer, en cuanto elimina también agravios comparativos entre los diferentes partidos judiciales, producto de las distintas fechas de aprobación de las normas de reparto y asegura la plena optimización de los medios materiales e informáticos al servicio de Juzgados de Guardia y Decanatos.

En cuanto al segundo punto, esto es el de la atribución de la competencia por la fecha de ocurrencia del hecho y no por la de recepción del atestado o asunto, es cierto que las razones de índole práctico que vuelven a exponerse por los Jueces Decanos de algunos partidos judiciales no deben ser en modo alguno despreciadas sino debidamente ponderadas. Sin embargo ha de ponerse de manifiesto que el criterio por el que optó la Sala de Gobierno en el proyecto remitido y que era, en realidad, el que venía aplicando en las distintas propuestas realizadas por las Juntas de Jueces desde hace mucho tiempo, no ha venido dando tampoco especiales problemas prácticos en los partidos judiciales donde se venía utilizando.

Entre las razones prácticas y el peligro de elección de Juzgado que propicia la norma de reparto que atribuye competencia al Juzgado que recibe el atestado, la Sala de Gobierno estima prevalente obviar

este segundo, y sentar como criterio general el de la atribución por la fecha de ocurrencia del hecho, en cuanto excluye la elección y garantiza el principio del Juez predeterminado por la ley.

Las objeciones que se plantean en relación con puntos concretos y determinados del proyecto de norma de reparto remitido no son de entidad suficiente para originar un cambio de las normas propuestas. En concreto en lo que atañe a la modificación que sugiere la Junta de Martorell en el punto 4.2 en cuanto a los atestados remitidos desde el centro penitenciario en relación con la falta prevista en el Art. 634 del C.P. en la medida en que si por los hechos debe seguirse una falta rápida el criterio viene sentado por la L.E.Crim., por lo que deberá instarse al Centro Penitenciario a dar cumplimiento a las previsiones del Art. 964,1º de dicha ley.

En los otros casos se trata, más bien, de dudas interpretativas que deben ser aclaradas del siguiente modo, sin perjuicio de las propias competencias de los Jueces Decanos ex Art. 86 del Reglamento 1/2000.

Punto 1.2 .- La ausencia de determinación del "momento de los hechos" se refiere al caso de que no se conozca la fecha concreta de ocurrencia del hecho, de modo que no sea posible atribuir el asunto a un Juzgado determinado que estuviese de guardia. Lógicamente en el caso de que se desconozca el día concreto pero la ocurrencia del hecho pueda situarse en una semana determinada podrá repartirse al Juzgado que estuvo de guardia entonces.

Punto 5.6 .-Entradas y registro. Ya consta en el acuerdo que la práctica de la diligencia fuera de las horas de audiencia corresponderá al Juez de guardia, lo que se ha de entender siempre a salvo de que el Juzgado que conozca del asunto disponga otra cosa.

Punto 5.13.- La norma relativa a este punto es, como las restantes, una norma de reparto. Ello presupone lógicamente que la competencia territorial esté atribuida por las leyes procesales al partido judicial de que se trate. Así se desprende del propio texto cuando se habla de "antecedentes". En el caso de que no los hubiese debe seguirse la norma general.

Punto 5.14.- Se trata de una norma para los Juzgados mixtos como se desprende de su texto. En el caso de medidas civiles adoptadas por el juez de Instrucción en el marco de las medidas de protección de la Ley 27/2003, se ha de entender que también es competente para conocer del incumplimiento de dichas medidas el Juez que las acordó.

Punto 5.19.- Testimonio de particulares. La norma propuesta por la Sala de Gobierno parte de la base de que los testimonios pueden ser deducidos por diferentes razones y que sólo justifica que se aparte al Juzgado que ordenó deducirlo cuando exista causa legal de abstención.

En cualquier caso, como antes se ha dicho, las dudas interpretativas correspondería dirimir las al Juez Decano.

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior Justicia de Cataluña en su sesión de 27 de abril de 2004 ACUERDA:

Aprobar definitivamente el texto adjunto de normas de reparto de los Juzgados de Instrucción de Catalunya con guardias semanales.

Tener por adaptadas las normas de reparto de los distintos partidos judiciales al texto citado, que entrará en vigor el día 1 de junio próximo.

Dar conocimiento del presente acuerdo al Departament de Justícia para la adaptación de los medios informáticos.

Instar a los distintos Juzgados Decanos para que, si transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor del presente acuerdo, existiese alguna incidencia importante en el cumplimiento de las normas aprobadas lo pongan en conocimiento de la Sala de Gobierno para introducir, en su caso, las correcciones que sean precisas.

Comunicar el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial para control de legalidad.

Dar al mismo la publicidad a la que se refiere el Art. 12 del Reglamento 1/2000 de órganos de gobierno."

Concedida la palabra a los a los asistentes, el Sr. Colomina anuncia voto particular.

Sometida a votación la propuesta se aprueba por mayoría, con el voto en contra de D. Pablo Colomina Cerezo.

VOTO PARTICULAR DEL SR. D. PABLO COLOMINA CEREZO VOCAL CON  
CATEGORIA DE JUEZ, DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  
JUSTICIA DE CATALUÑA

En primer lugar debo reconocer la loable finalidad pretendida por el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al pretender unificar las normas de reparto aplicables en el territorio en el que ejercita sus competencias, así como el notable esfuerzo desarrollado para la consecución de dicha finalidad, en beneficio de una mejor administración de la justicia.

Dicho lo anterior, debo manifestar mi disconformidad con el criterio expuesto por el resto de Vocales de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, si bien entendiendo las razones que llevan a los mismos a pretender la aprobación de las "Normas de Reparto de los Juzgados de Instrucción de Cataluña".

Debo indicar que el núcleo de la discrepancia estriba en la **legalidad, aplicación e interpretación** del artículo 25.2 del Reglamento numero 5/1995, de 7 de junio de los Aspectos Accesorios de la Actuaciones Judiciales que establece que "Las Salas de Gobierno podrán recabar de las correspondientes Juntas de Jueces la elaboración de nuevas normas de reparto o la modificación de las vigentes cuando ello fuere necesario para la mejor administración de justicia. Si en el plazo de un mes a partir de dicho requerimiento, la Junta de Jueces omitiera la propuesta solicitada, la Sala de Gobierno aprobará las normas que estime pertinentes"

En este sentido debe indicarse, **respecto de la legalidad** del mencionado precepto reglamentario, y a los fines que interesan en de este voto particular, que el ejercicio de la potestad reglamentaria, para ser legítimo, debe realizarse dentro de unos límites, que han sido puestos de manifiesto por numerosas sentencias del Tribunal Supremo. De tal modo, que entre otros, son límites formales de la potestad reglamentaria, la observancia de la jerarquía normativa, respecto a la Constitución y a la Ley (arts. 9.3, 97 y 103 CE), entendiendo que son exigencias y límites materiales, que afectan al contenido de la norma reglamentaria, entre otros el respeto a la ley y a los principios generales del Derecho, ya que, la Administración está sometida a la Ley y al Derecho, (artículo 103 de la Constitución Española), y el Derecho "no se reduce al expresado en

la Ley sino que comprende dichos Principios en su doble función legitimadora y de integración del ordenamiento jurídico, como principios técnicos y objetivos que expresan las ideas básicas de la comunidad y que inspiran dicho ordenamiento", (STS, . 3ª sec. 4ª , S 07-10-2002), y en este sentido se vulnerara el principio de jerarquía normativa cuando exista una contradicción entre la norma que pretende ser desarrollada, y el Reglamento que la desarrolla. Dicho limite se encuentra expresamente previsto en la norma habilitante de la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial, cuando establece el artículo 110.2 de la L.O.P.J., que "El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia y con subordinación a las leyes, podrá dictar reglamentos de desarrollo de esta ley para establecer regulaciones de carácter secundario y auxiliar".

Descendiendo de las consideraciones jurídicas generales al caso concreto, es de resaltar por una parte, que el artículo 167 de la L.O.P.J., establece en su apartado primero que "Donde hubiere dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirán entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional, (...)". Al propio tiempo se establece en el artículo 152.2 apartado 1º párrafo primero que "A las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, en Pleno o en Comisión, compete además: Aprobar las normas de reparto de asuntos entre (...) los Juzgados del mismo orden jurisdiccional, con sede en la Comunidad Autónoma correspondiente.", por tanto tales preceptos de la L.O.P.J, atribuyen de modo inequívoco la propuesta de norma de reparto a las Juntas de Jueces de los diversos partidos judiciales, y la aprobación de las mismas a las correspondientes Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Del mismo modo únicamente se prevé, una excepción, respecto de dicho sistema de distribución de asuntos entre los diversos Juzgados de un mismo orden jurisdiccional y radicado en un mismo partido judicial, en el artículo 152.2 apartado 1º párrafo segundo, de la citada L.O.P.J, cuando establece, -el subrayado no aparece en la disposición citada- que "Excepcionalmente, de forma motivada, y cuando las necesidades del servicio así lo exigieren, la Sala de Gobierno podrá ordenar que se libere del reparto de asuntos, total o parcialmente, por tiempo limitado, a una Sección o a un Juez determinado."

Por otra parte debe indicarse que la regulación que se efectúa en el artículo 25.2 del Reglamento numero 5/1995, de 7 de junio de los Aspectos Accesorios de la Actuaciones Judiciales, -anteriormente reproducido-, o cuanto menos, -como posteriormente se indicará-, la interpretación y aplicación que del mismo se realiza por parte de la Sala de Gobierno, contraviene frontalmente los preceptos anteriormente citados de la L.O.P.J, en cuanto que dicha norma reglamentaria, no se limita a desarrollar las reglas de aprobación o modificación de las normas de reparto, sino que posibilita que se deje sin efecto, mediante la utilización de un concepto jurídico indetermindado, ("la mejor administración de justicia" ), el sistema de necesaria propuesta de las Juntas de Jueces, para la aprobación de dichas normas de reparto, al configurar a la Sala de Gobierno, como órgano iniciador del procedimiento de elaboración de las normas de reparto, y posibilitar, como sucede en la resolución adoptada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la elaboración por esta de las denominadas "Normas de reparto de los Juzgados de Instrucción de Cataluña", lo cual es contrario al artículo 167 de la L.O.P.J, ya que dicha norma habilita para que las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia dejen sin efecto dicho precepto, en lo concerniente a la necesaria propuesta de las Juntas de Jueces, para aprobar las normas de reparto, dejando vacío de contenido dicho precepto.

En este sentido debe indicarse que la L.O.P.J, únicamente ha exceptuado la necesidad de la propuesta por parte de las Juntas de Jueces, en lo atinente a la distribución del reparto de los asuntos, en el artículo 152.2 apartado 1, cuando indica que la Sala de Gobierno podrá ordenar que se libere del reparto de asuntos, total o parcialmente, por tiempo limitado, a una Sección o a un Juez determinado, y dicha excepción la regula la L.O.PJ., con muchas cautelas, al afirmar "Excepcionalmente, de forma motivada", sin que se haya previsto otra excepción al mecanismo propuesta de Junta de Jueces, aprobación de Sala de Gobierno.

Por ello el artículo 25.2 del Reglamento 5/1995 de 7 de junio, vulnera el principio de jerarquía normativa, (art. 9.3 de la Constitución Española), al contravenir y dejar vacío de contenido el artículo 167 y 170 de L.O.P.J., excediendo la función de desarrollo de dicho precepto, e infringiendo la propia norma habilitante de la potestad reglamentaria del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, (artículo 110.2 y 127.8 de la L.O.P.J.), que indica, como no puede ser de otro modo, la subordinación del reglamento a la Ley,

y por ello debe ser inaplicable, aplicándose directamente los preceptos de la L.O.P.J., en cumplimiento del principio de jerarquía normativa, que vincula a todos los poderes públicos (art. 9.3 de la Constitución Española).

Respecto a la **aplicación e interpretación del mencionado precepto** debe indicarse, a los efectos meramente dialécticos, que aún partiendo de la hipótesis, (no compartida), de la legalidad del artículo 25.2 del Reglamento 5/1995 de 7 de junio, el criterio de interpretación sistemática de las normas que establece el Código Civil en su art. 3.1, debe aplicarse a los Reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, de tal modo que la hermenéutica que se realice sobre los mismos no pueda hacerse aisladamente sino poniendo en relación todos sus preceptos entre sí y con los preceptos de la L.O.P.J.. En tal sentido la interpretación y aplicación del apartado 2 del artículo 25 del mencionado Reglamento debe ser restrictiva, pues el mismo establece una excepción al modo de aprobación general de las normas de reparto, (artículos 167.1 y 170.1 de la L.O.P.J., y 25.1 del Reglamento 5/1995 de 7 de junio), al prescindir de la necesaria propuesta de las Juntas de Jueces, debiendo aplicarse dicho precepto en supuestos excepcionales, interpretándose de modo restrictivo el concepto jurídico indeterminado que el mismo contiene, ("para la mejor administración de la justicia"), quedando fuera del ámbito de cobertura de dicho precepto todas aquellas interpretaciones y aplicaciones del mismo que no respeten la interdicción de la arbitrariedad, establecida para todos los poderes públicos en el artículo 9.3 CE y que supone la necesidad de que el contenido de las normas y actos no sean incongruentes o contradictorias con la realidad que se pretenden regular o sobre la que pretenden ser aplicados, ni con la "naturaleza de las cosas" o la esencia de las instituciones. Y en este sentido se pretende la aplicación para la totalidad de los Juzgados de Instrucción de Cataluña, y para la totalidad de las normas de reparto de los mismos, del mecanismo excepcional para la aprobación de las normas de reparto, previsto en el artículo 25.2 del citado Reglamento, aplicación que por su carácter general excede del marco reglamentario y carece de cobertura en el mismo, pues es contraria a la naturaleza del procedimiento de aprobación de las normas de reparto (artículos 167 y 170 de la L.O.P.J. y 25.1 del Reglamento 5/1995 de 7 de junio), que prevé la necesaria propuesta de las Juntas de Jueces, y deja vacía de contenido dicha potestad



atribuida a las correspondientes Juntas de Jueces, y es por ello por lo que debo formular este voto particular.

**Y PARA QUE CONSTE** y en cumplimiento de lo acordado, libro y firmo el presente en Barcelona, a veintiocho de abril de dos mil cuatro.